

Postconflicto en Colombia y seguridad regional y bilateral, una propuesta de redefinición de la agenda.

Mauricio Jaramillo Jassir

Internacionalista de la Universidad del Rosario, magíster en Relaciones Internacionales de Sciences-Po Toulouse y en Geopolítica de la Universidad París 8. Aspirante a Doctorado en Ciencia Política en último año en la Universidad de Toulouse I. Profesor de carrera en el centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario.

Resumen

Desde su internacionalización a comienzos de los noventa y especialmente con la puesta en marcha del Plan Colombia, el conflicto colombiano adquirió connotaciones regionales. Esto se debió a tres factores ; la postura asumida por algunos Estados para involucrarse con la paz en Colombia ; las exigencias de algunos gobiernos, especialmente en los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez para que los vecinos tomaran partido; y recientemente, por el pedido expreso del país, para que la región en su conjunto, apoyara el proceso de paz que debe conducir a la desmovilización de las FARC. En medio de esta expectativa han surgido inquietudes y preguntas por el papel de Suramérica y su contribución a la viabilidad del Postconflicto. Nunca antes en su historia, la región había canalizado tantos esfuerzos, en la concreción de una paz negociada en una de sus naciones. UNASUR como paraguas institucional ha tenido una incidencia en algunas etapas de la desactivación del conflicto colombiano, por lo que los retos que se desprenden de este escenario son innumerables. El presente artículo, explora los alcances y las limitaciones de UNASUR, en el postconflicto colombiano. Para ello se divide en tres partes. En primer lugar, se describe brevemente el papel que desempeñaron algunos países latinoamericanos como Cuba, México y Venezuela en la visibilidad del conflicto y en la apertura de espacios para su finalización. En segundo lugar, se analiza el involucramiento de UNASUR en el mismo, desde que el primer Secretario General, Néstor Kirchner, intercedió para forjar una humanización del mismo. Finalmente, se exploran las posibilidades de incidencia del bloque suramericano en aspectos clave del proceso en curso.

Introducción : un nuevo contexto internacional, regional y nacional

Luego de que el gobierno colombiano decidiera poner fin a medio siglo de confrontación armada con la guerrilla más grande de ese país, surge la necesidad de reflexión por el papel de la región, en lo corrido de los diálogos, y el que pueda desempeñar una vez pactada la paz. El escenario actual que ha conducido a los Acuerdos de La Habana, tiene un contexto regional muy diferente al que acompañó otros procesos de paz. Esto es válido especialmente para el último y de mayor envergadura, emprendido por el gobierno de Andrés Pastrana Arango a finales de los noventa, y terminado abruptamente en febrero de 2002. Sobresalen al menos tres diferencias importantes en cuanto al marco internacional, regional e interno entre ese momento y el presente.

En primer lugar, para ese entonces aún Estados Unidos tenían una relación estrecha con América Latina, y su prestigio en el mundo y en esa zona, no estaba tan cuestionado. La intervención militar en Serbia contra el gobierno de Slobodan Milosevic en 1999, fue duramente contestada por los gobiernos de la República Popular de China y la Federación Rusa. Sin embargo, en términos generales, se llegó a contemplar la posibilidad de que aquello respondiera, al propósito humanitario de poner fin a la “limpieza étnica” en Kosovo, el último resquicio de la guerra de los Balcanes, que tanto impacto había causado (Teson, 2009, pág. 42). Había una sensibilidad internacional por detener la situación, especialmente, desde que se denunció el genocidio en contra de población bosnia-musulmana, en el campo de refugiados de Srebrenica en julio de 1995. Actualmente, el desprestigio por el fracaso rotundo en las intervenciones de Afganistán e Irak, no deja espacio para siquiera contemplar la idea de una inspiración humanitaria. Esto derivó además, en un alejamiento de Washington respecto de América Latina, que se han intentado corregir, en los últimos años de la segunda administración de Barack Obama.

En segundo lugar, las FARC habían conseguido un avance militar sin antecedentes, y el Estado colombiano a su vez, había cedido espacios en el plano político así como en el estratégico-operativo-táctico militar. La toma del municipio de Mitú, capital del Vaupés, en noviembre de 1998 en la frontera con el Brasil, marcaba para muchos, el tránsito desde una guerra de guerrillas (o popular prolongada) a una guerra de movimientos. Se temía a finales de los noventa, porque la guerrilla pudiera tomar el control de otros municipios con similitudes con el Mitú, es decir, apartadas y donde el Estado no tenía capacidad de respuesta.

Eso quedó el descubierto, cuando las FARC a través de la Operación Marquetalia tomaron el control de esa población, y tuvieron como rehenes durante varios años a los policías que se encontraban en dicha estación y que buscaron repeler, sin éxito el feroz ataque. EN respuesta a la dramática situación, el gobierno había negociado con Estados Unidos ayuda en el marco del Plan Colombia. Inicialmente, se contaría con el apoyo de varios actores de la comunidad internacional, y se pensaba que se canalizaría para la reconstrucción en el Postconflicto. El entonces presidente de Colombia lo comparaba con el Plan Marshall. No obstante, las discusiones en el Congreso de Estados Unidos, hicieron que el Plan tomara una orientación distinta, y el énfasis finalmente fue puesto en el fortalecimiento de la Fuerza Pública. Es decir, el Plan Colombia que inició como una propuesta de reconstrucción para la paz, se convirtió en su aplicación, en cooperación especialmente para fortalecer el aparato militar y policial consistente en 4 billones de dólares (Dion & Russler, 2008, pág. 400). Esto provocó inquietudes en algunos países de la zona, pues se temía por una regionalización del conflicto colombiano. Especialmente, Brasil, Perú y Venezuela mostraron su preocupación, pues temían por un escalamiento del mismo, provocado por la militarización que se derivaría del Plan Colombia (BBC Mundo, 2000).

Y tercero, el gobierno tenía en ese entonces la obligación de negociar con la guerrilla, por el “mandato por la paz” aprobado en una consulta el 26 de octubre de 1997. Más de 10 millones de colombianos, se habían pronunciado por poner fin de manera pactada al conflicto. La iniciativa fue presentada por La Red de Iniciativas por la Paz, La Fundación País Libre y UNICEF (Diario El Tiempo , 1998).

Las exigencias por las que se manifestó ese segmento representativo de ciudadanos fueron las siguientes:

- No más guerras: resuelvan pacíficamente el conflicto armado.
- No más atrocidades: respeten el derecho internacional humanitario.
- No vinculen menores de 18 años a la guerra.
- No asesinen.
- No secuestren personas.
- No desaparezcan personas.
- No ataquen a la población ni la desplacen por la fuerza.
- No vinculen civiles al conflicto armado.

En contraste, el actual proceso de paz tiene otro origen y contexto. En primero lugar, el papel de Washington ha variado pues no se puede disociar su eventual papel en las negociaciones y en el Postconflicto, sin su posición frente a América Latina, en los últimos dos años. Es importante tener en cuenta, una estrategia renovada hacia la región que resulta de la conjugación, del inocultable repliegue de gobiernos progresistas, la presión para acabar con el bloqueo a Cuba, y la degradación de la situación en Venezuela. Con este marco, el gobierno de Barack Obama, entendió la necesidad de flexibilizar su postura y avanzó en el descongelamiento de la relación con La Habana.

Esta nueva aproximación, confirmó una relación especial entre Bogotá y Washington que ha sido considerada por muchos, como esencial para el segundo para mantener su influencia en la región andina, donde el anti americanismo en política exterior ha sido evidente en los últimos años. Por primera vez, un gobierno estadounidense decidió nombrar a un representante especial para el proceso de paz en Colombia, Bernard W. Aronson. y dio un espaldarazo sin antecedentes, a los esfuerzos de Juan Manuel Santos. En la época de los diálogos en el Caguán, el gobierno de Bill Clinton decidió retirar el apoyo que inicialmente había dado a esa negociación, ante el secuestro y posterior asesinato de tres antropólogos estadounidenses, Terence Freitas, Ingrid Washinawatok, y Laheenae Gay, a manos de las FARC. Pero, con la continuación de los Diálogos de Alto Nivel entre ambos gobiernos. el apoyo esta vez ha sido expreso, y se espera que el Congreso apruebe la propuesta del Plan Paz Colombia, que equivaldría a unos 450 millones de dólares (Ayuso & Lafuente, 2016), un apoyo para el Postconflicto muy similar al concebido por la administración Pastrana pero que en ese momento no se concretó.

En el plano regional, la salida de la escena política de Hugo Chávez, le quita al gobierno colombiano presión y hace que las FARC pierdan visibilidad regional. El expresidente venezolano había sido un promotor de la paz en Colombia, insistiendo en la imperiosa necesidad de ajustarlo al Derecho Internacional Humanitario, reconociéndole la beligerancia al grupo (Szesnat & Bird, 2012, pág. 222). Una propuesta que cayó muy mal en algunos círculos colombianos, pues se interpretó como una señal de apoyo a la guerrilla, y como un desafío al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La situación regional actualmente es bien distinta, y no existe ni la exigencia de Colombia a terceros de declarar las FARC como terroristas, ni divisiones regionales sobre cómo calificar a la guerrilla. El debate sobre si

deben o no ser catalogadas como tal, ha dado paso a un apoyo unívoco y sin condicionamientos al proceso de paz.

Internamente, el panorama también es diferente pues el Estado negoció con una guerrilla militarmente debilitada, y con espacios regionales cada vez más cerrados, pues las FARC jamás pudo capitalizar el progresismo a escala regional, y entablar negociaciones de paz en medio de ese marco que lo hubiera resultado más favorable.

Este nuevo contexto, invita a hacer una reflexión sobre la nueva institucionalidad suramericana y el Postconflicto en Colombia. Se trata de un escenario renovado y en el que sobresale la creación en 2008 de la Unión de Naciones Suramericanas, que desde sus inicios, estuvo presente en la humanización del conflicto colombiano.

La región clave en la paz

La internacionalización del conflicto colombiano tuvo al menos dos procesos sobresalientes, o si se quiere dos lecturas. Por internacionalización se entienden el grado de exposición del conflicto a la comunidad internacional (Carvajal & Pardo, 2002, pág. 185) (Observatorio de Política Exterior Colombia, 2008, pág. 1) y el intento del Estado colombiano por inscribir el mismo, en una dinámica global como la del terrorismo (Borda Guzmán, 2007, pág. 68). Esto dio pie a que, de un lado, la comunidad internacional se involucrara en los intentos por establecer la paz, y de otro, Estados Unidos *por invitación* (Tickner, 2007, pág. 91) tuviera una injerencia directa del mismo, no tanto para su resolución, sino para apoyar al Estado militarmente. Los primeros contactos que tuvieron el claro respaldo de la comunidad regional, y más precisamente de México y de Venezuela, ocurrieron durante el gobierno de César Gaviria a comienzos de los noventa. Tras conversar con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar –que agrupaba al Ejército de Liberación Nacional, al Ejército Popular de Liberación y a las FARC- en Cravo Norte departamento de Arauca en el occidente colombiano, se acordaron negociaciones en Caracas y en Tlaxcala. Allí por primera vez, se vio a guerrilleros y funcionarios del gobierno en el exterior, dialogando con el fin de llegar a un acuerdo que pusiera fin al conflicto, y permitiera la desmovilización de guerrilleros. Tal como había sucedido en el pasado reciente, con la reintegración del M-19.

Posteriormente, en el gobierno de Ernesto Samper se avanzó en la necesidad de dotar

de un marco jurídico ese conflicto, con la firma y ratificación del Protocolo Adicional (II) a los Convenios de Ginebra de 1977 ¹(Carvajal & Pardo, 2002, pág. 186). Se acordó, además, un punto de suma relevancia en cuanto a la visibilidad regional e internacional y que contribuía a su humanización: el establecimiento en el país de una Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esa labor de monitoreo, le daba una relevancia capital a un tema transversal y que no había tenido suficiente peso en la política estatal.

Con la llegada de Andrés Pastrana y de la Diplomacia por la Paz, la internacionalización se profundizó y esta vez se confirmaron dos grupos de países amigos, que acompañaron las negociaciones de paz con FARC y ELN. En los diálogos de la zona de Caguán al sur del país, el Grupo de Países estaba conformado por Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela. A esto se sumó un enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, James Lemoine (Diario El Tiempo, 2002). Estos fueron clave en que el proceso no se abandonara, ante los evidentes desacuerdos entre guerrillas y gobierno. No obstante, en febrero de 2002, y con el secuestro del congresista Jorge Gechem, el presidente Pastrana dio por concluidas las negociaciones.

La llegada casi seis meses después de Álvaro Uribe Vélez, estuvo marcada por las exigencias de la guerrilla, y por condiciones del gobierno para negociar entre las que aparecía una renuncia a las armas y la libertad de todos los secuestrados. De nuevo se acudió a la comunidad internacional, esta vez al Secretario General de Naciones Unidas, Koffi Annan, para que ejerciera sus buenos oficios -inicialmente el gobierno quiso la mediación, pero Annan sugirió la figura de buen oficiante-. Las FARC respondieron tajantemente que, aunque el Papa Juan Pablo II o la Reina Isabel fueran mediadores, jamás negociarían con esa administración, acusada de cercanía con el paramilitarismo (Diario La Nación, 2002). Así se continuó con el esfuerzo de Pastrana de aislar a la guerrilla, para lo cual se contó con el respaldo de México, cuyo gobierno de Vicente Fox, decidió cerrar un espacio que esa guerrilla tenía en ese país en manos de “Marco Calarcá”, y con la inclusión de las FARC en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Pero el papel del vecindario fue más allá, pues mientras el gobierno venezolano insistía en una salida negociada, el gobierno de Uribe se aislaba de Suramérica abriendo tres

¹ Se trata de un Protocolo que busca la protección a las víctimas civiles en conflicto armados de carácter no internacional.

frentes de batalla.

- Se firmó un acuerdo militar con EEUU que permitía la presencia de militares en siete bases (Revista Semana, 2009).
- Retomó unilateralmente las aspersiones aéreas de glifosato en la frontera con Ecuador. Esto a pesar del compromiso de no hacerlo en una franja de 10 kilómetros según un convenio firmado el 7 de diciembre de 2005 entre los ministros de relaciones exteriores, Carolina Barco y Francisco Carrión (Diario El Universo, 2006).
- Exigió a los vecinos que declarasen a las FARC como un grupo terrorista.

En marzo de 2008, las relaciones llegaron a su peor momento, cuando de forma sorpresiva, el gobierno de Uribe Vélez autorizó el bombardeo en la zona limítrofe entre Colombia y Ecuador, ingresando al espacio aéreo ecuatoriano y provocando daños en la zona. Aunque en un primer momento, se negó la incursión en el espacio vecino, quedó en evidencia que se había bombardeado un espacio soberano del Ecuador. Quito y Caracas rompieron relaciones con Bogotá, hasta que en la Cumbre de Bariloche una de las primeras de UNASUR, quedó manifiesta la voluntad de los países de la zona de no apoyar ese tipo de intervenciones, contrarias al derecho internacional, y Colombia quedó aislada en su propósito en encauzar la zona en su guerra contra las FARC. En la declaración final quedó consignada la voluntad de defender la integridad territorial de los Estados decidiendo, entre otros lo siguiente:

Reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y en consecuencia la paz y seguridad en la región (Unión de Naciones Suramericanas, 2009).

Finalmente, en la XX Cumbre convocada por el Grupo de Río, Uribe y Correa ponían fin a la disputa, pero subsistía la imagen de un Ecuador, que no olvidaría fácilmente semejante agresión.

UNASUR y la paz en Colombia

El primer secretario de UNASUR, Néstor Kirchner tuvo un interés marcado en lograr la liberación de algunos secuestrados. Por eso uno de sus primeros gestos, fue la participación en la liberación del hijo de Clara Rojas, secuestrada por las FARC y quien había nacido en cautiverio y debía ser entregado. No obstante, y a pesar de que la guerrilla había anunciado tener al menor, no estaba en su control y el evento convocado para su liberación, fue un rotundo fracaso (Diario La Nación, 2008). La guerrilla no sólo le había mentido al país, sino que quedaban al descubierto problemas en la cadena de mando entre el Secretariado –máxima instancia guerrillera- y algunos poderosos mandos medios.

Durante el mandato de Uribe que coincidió con la creación de UNASUR, la tensión entre Bogotá y sus vecinos por las FARC fue en aumento, hasta la llegada de Juan Manuel Santos y el anuncio dos años después de su primer gobierno de negociar con las FARC una paz definitiva. Desde el comienzo, el proceso estuvo inmerso en una lógica regional e internacional. Se anunció el acompañamiento de Chile, Cuba, Noruega y Venezuela y se tuvo el respaldo pleno del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

¿Cuál debía ser el papel de la comunidad regional en el proceso? Se podría decir que la región suramericana ha sido esencial en varios aspectos. Desde la llegada de Ernesto Samper Pizano a la Secretaría General, hubo un claro interés en promocionar la salida negociada en Colombia a través de la institucionalidad suramericana. Esto tenía sentido, pues a diferencia del pasado – y de ahí la necesidad de resaltar la relevancia del nuevo contexto regional- se podría aprovechar la existencia de una constelación de instituciones que le daban al proceso visibilidad, transparencia y acompañamiento. Esta vez, no sólo las partes avanzaron en temas de fondo, como nunca sucedió en el Caguán, sino que se llegó a propuestas concretas sobre los aportes de la región suramericana que serían canalizables a través de UNASUR.

En ese orden de ideas, cabe resaltar la existencia del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), el primero de los consejos sectoriales, creado en pleno contexto del debate sobre el uso de bases militares en Colombia, por parte de Estados Unidos. En el seno de ese Consejo, el conflicto colombiano fue tema clave y se contempló la posibilidad de revivir el Fuerza Cruz del Sur, compuesta por tropas y personal civil de Argentina y Chile con el fin de verificar los acuerdos de paz entre gobierno y guerrilla (Pagni, 2016). Ahora

bien, ese ideal jamás se concretó en la realidad, pero quedó la idea de que existe un potencial para que por iniciativa de un grupo de países, se pueda instalar una comisión de verificación de paz en terceros países.

En 2015, en uno de los momentos más importantes del proceso de paz, la administración Santos y la guerrilla, dieron un paso de trascendencia al acordar un *desescalamiento* del conflicto con lo que se allanaba el camino para un cese definitivo de hostilidades. De nuevo UNASUR apareció, y en un comunicado se anunciaba la necesidad imperiosa de “agilizar en La Habana y desescalar en Colombia” . Tal era el título del comunicado conjunto número 55 del 12 de julio. Fue un paso fundamental pues allí se pactó el silencio de fusiles definitivo, que se hizo efectivo con posterioridad, en los siguientes términos (Gobierno Nacional de Colombia, 2015):

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos decidido:

- I. Hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar sin demoras a la firma del Acuerdo Final, para lo cual cambiamos la metodología por la de un trabajo técnico, continuo y simultáneo sobre los puntos centrales de la Agenda, a la vez que se construyen acuerdos en la Mesa. Para ello definimos un plan con metas preestablecidas.
- II. En particular, acordar sin demoras los términos del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación.

Para ello, las delegaciones solicitarán el acompañamiento en la sub comisión técnica de un delegado del Secretario General de Naciones Unidas y un delegado de la presidencia de UNASUR (actualmente Uruguay), con el fin de que contribuya a poner en marcha la discusión sobre el sistema de monitoreo y verificación y a preparar desde ahora su implementación, sin perjuicio de la decisión de las delegaciones sobre la participación en el futuro, en el sistema de monitoreo y verificación, de otras organizaciones o países.

Es importante recalcar que desde ese entonces, se dio un acompañamiento de la Presidencia Pro Tempore en cabeza de Uruguay, y por decisión de UNASUR el ex ministro

de trabajo de ese país José Bayardi, encabezaría la comisión de verificación solicitada por las partes en La Habana. Así se conformó un equipo que contó además con Jean Arnault, enviado especial de la Secretaría General de Naciones Unidas. Ese grupo que se reunió con delegados de la guerrilla y del gobierno, fue esencial en la determinar una metodología para verificar en el futuro el cese del fuego entre las partes, y la dejación de armas por parte de las FARC.

No obstante y de manera sorpresiva, el gobierno anunció una vez alcanzado un cese definitivo de hostilidades con las FARC, que los encargados de la verificación serían, por un lado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con gran experiencia en el tema, y por otro la CELAC, donde sobresalía la membresía de Cuba, quien había desempeñado un papel de relevancia en el proceso. La pregunta que emergió en el ambiente fue ¿por qué el gobierno colombiano decidió excluir a UNASUR del proceso de verificación?

La tesis más probable es que el gobierno haya cedido a la presión de sectores internos, que veían con injustificada desconfianza la labor del bloque suramericano. Círculos de derecha han insistido vehementemente, en que esa organización representa los intereses oscuros de una nueva izquierda a la que califica como castro-chavista. Este segmento se alimenta de prejuicios propios de la Guerra Fría, y por tanto anacrónicos. A pesar de ello, ese discurso todavía genera algunos consensos en la política colombiana, y es hasta cierto punto, redituable en épocas de grandes debates nacionales.

A pesar de esa decisión, la incidencia de UNASUR en el postconflicto no es descartable, pues existen al menos tres temas en donde puede incidir de manera constructiva. Estará, eso sí, a prueba la voluntad de los Estados de cooperar en momentos en que existen grandes tensiones fiscales producto de una desaceleración económica. Estos temas son la memoria, las víctimas, la reconciliación, el problema de las drogas y la construcción de paz. Elementos alrededor de los cuales, gira en torno la posibilidad de éxito en el postconflicto. Éste ha sido un tema que la Secretaría General desde septiembre de 2014 ha tratado de abanderar y visibilizar regionalmente y en el que la cooperación puede ser una realidad. En el proceso de reconstrucción de la memoria con propósitos reconciliatorios, está en juego la identidad del país. En esa definición el apoyo suramericano es esencial, pues suma esfuerzos y visibiliza regionalmente una tragedia de décadas, a la que le urgen canales de expresión, que no se circunscriben a los límites de Colombia. Siguiendo esa línea y para darle un eco regional el Secretario General, Ernesto Samper convocó una cumbre por la paz una vez

conocido el Acuerdo Final entre guerrilla y gobierno.

De otra parte, en cuanto al problema mundial de las drogas y que fue uno de los puntos de negociación entre las partes, UNASUR está llamada a continuar con la compleja pero no imposible tarea, de avanzar hacia una posición común de todos los suramericanos que refleje de forma más democrática las diferentes visiones, y en la que no tengan cabida imposiciones unilaterales desde el norte. El Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas tiene en su haber, el activo histórico de consensuar un documento donde se plasman las bases de un futura posición común (FES-ILDIS y UNASUR, 2016). Por ende, la región suramericana será esencial para que Colombia pueda abandonar la estigmatización que por años ha afectado negativamente su imagen. A su vez, será más fácil concertar con algunos andinos, que han sufrido una historia similar por la producción, como Bolivia y Perú con los cuales se comparten las dinámicas como reflejo del llamado efecto globo (The Economist, 2003). Durante décadas, las posturas de algunos gobiernos en Colombia fueron ambiguas respecto del vínculo entre narcotráfico y violencia política. Especialmente, durante la presidencia de Pastrana se cambió drásticamente el discurso. En primera instancia se habló de guerrillas y narcotráfico como fenómenos separables, y luego con la ruptura de los diálogos y buscando autorización para invertir recursos del Plan Colombia en la lucha anti subversiva se hizo hincapié en que se trataba de dinámicas interdependientes. El gobierno de Uribe los llegó a considerar como un cartel incluso. Despejado el panorama del conflicto, hay un escenario ideal para que los tres andinos que han sufrido la estigmatización y el aislamiento, concreten una política o posición común, pues comparten intereses vitales y vulnerabilidades externas en la materia.

Finalmente, en la idea de elaborar una doctrina de paz suramericana en el seno del CDS, Colombia tiene un gran aporte por hacer, esto en el evento que continúen las discusiones sobre misiones de paz suramericanas extra regionales. Las compatibilidades entre la Fuerza Pública colombiana y otras de la zona, ya han sido puestas al servicio de diferentes misiones, que confirman que la vocación pacífica de la zona, no se limita únicamente a la ausencia de conflictos interestatales y recientemente internos –gracias a la paz en Colombia-, sino que redunda en acciones concretas hacia el exterior.

Conclusiones

Desde que se emprendió la internacionalización, la región ha sido clave en el conflicto colombiano, y especialmente en la búsqueda de una salida pacífica. Las lógicas transnacionales como el narcotráfico, el desplazamiento de personas a países vecinos, las fumigaciones por aspersión aérea, y los efectos nefastos de su exacerbación han terminado por involucrar a los Estados circundantes.

A su vez, las lecciones del pasado reciente, cuando existía un grupo de países amigos del diálogo pero sin que existiera un esquema negociación que permitiera avanzar en lo sustancial, hacían que esa participación regional fuera limitada y confusa. El panorama actual, es bien diferente pues el involucramiento de los suramericanos es más claro, efectivo, y cuenta con una institucionalidad, que le permite sumar esfuerzos para contribuir a aspectos concretos del postconflicto colombiano.

Por otra parte, el cambio de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, manifestado en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, y en el apoyo sin ambigüedades al proceso de paz y al Postconflicto colombiano, abren la puerta para que la región en pleno coopere sin que medien necesariamente las disparidades ideológicas.

Este panorama plantea escenarios de convergencia entre distintos actores de la zona, interesados en promover una paz duradera en Colombia. Por años, la región estuvo dividida en cuanto a la posición que debía asumir frente a la confrontación, pero hallado un acuerdo que debe ser refrendado en consulta popular (y en la décima conferencia por parte de las FARC), se despeja el camino para que Suramérica continúe su proceso de construcción regional en un tema clave de su identidad: la paz. Por décadas, se insistió en la vocación pacífica que se manifestaba en la ausencia de conflictos interestatales, pero siempre con el bemol de la dramática guerra en Colombia. Por eso, la región ha tratado de dimensionar este momento histórico que corrobora esa identidad de paz, y se apresta para enfrentar un escenario inédito, pues jamás un postconflicto como tal, había ocurrido en Suramérica. Si bien se dieron otras confrontaciones internas, como en el Perú donde existen elementos en común, el conflicto colombiano fue particularmente longevo, y alcanzó una regionalización que lo hace difícilmente equiparable con otros.

Su terminación abre una veta para no solo confirmar una identidad regional fuertemente afincada en la paz, sino para estimular discusiones y consensos en temas como la flexibilización y actualización de la lucha contra el flagelo global de las drogas, un combate

más efectivo contra el crimen transnacional organizado, y la puesta en marcha de una doctrina de construcción de la paz, donde las fuerzas militares y policiales de los países suramericanas puedan trabajar conjuntamente.

Bibliografía

- Ayuso, S., & Lafuente, J. (5 de febrero de 2016). Obama promete 450 millones para apoyar la paz en Colombia en 2017. *Diario El País*.
- Borda Guzmán, S. (enero-junio de 2007). La internacionalización del conflicto armado después del 11 de septiembre. *Colombia Internacional* (65), 66-89.
- BBC Mundo. (30 de agosto de 2000). *BBC Mundo*. Obtenido de <http://www.bbc.co.uk/spanish/extra0008colombiaintro.shtml>
- Carvajal, L., & Pardo, R. (2002). La internacionalización del conflicto doméstico y los procesos de paz. (Historia reciente y desafíos). En M. Ardila, D. Cardona, & A. Tickner, *Prioridades y Desafíos de la Política Exterior Colombiana* (págs. 181-236). Bogotá: FESCOL.
- Diario El Tiempo . (30 de junio de 1998). El mandato por la paz es obligatorio . *El Tiempo*.
- Diario El Tiempo. (15 de enero de 2002). Se salvó el proceso de paz. *El Tiempo*.
- Diario La Nación. (10 de agosto de 2002). Las FARC rechazaron volver al diálogo. *La Nación* .
- Diario El Universo. (18 de diciembre de 2006). Embajador Suárez no regresará a Colombia mientras dure la crisis. *El Universo*.
- Diario La Nación. (1 de enero de 2008). Tras el fracaso de las negociaciones, regresó Kirchner al país. *La Nación*.
- Dion, M., & Russler, C. (2008). Eradication Efforts, the State, Displacement and Poverty: Explaining Coca Cultivation in Colombia during Plan Colombia. *Journal of Latin American Studies*, 399-421.
- FES-ILDIS y UNASUR. (2016). *De la guerra al ciudadano de las personas. Políticas de drogas en Suramérica después de Ungass*. Quito: FES-UNASUR.
- Gobierno Nacional de Colombia. (12 de julio de 2015). *Mesa de Conversaciones*. Recuperado el 28 de agosto de 2016, de

<https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-55-la-habana-12-de-julio-de-2015>

Pagni, C. (27 de junio de 2016). Colombia, un puente. *El País*.

Observatorio de Política Exterior Colombia. (Abril de 2008). La Internacionalización del conflicto colombiano. Claves para abordar el proceso. *Comentario de Actualidad No. 10*(10), 1-8.

Revista Semana. (4 de agosto de 2009). Estados Unidos utilizará en total siete bases militares en Colombia. *Semana*.

Szesnat, F., & Bird, A. (2012). Colombia. En E. Willmschurst, *International Law and the Classification of Conflicts* (págs. 203-241). Oxford: University Press.

Teson, F. (2009). Kosovo: A Powerful Precedent of the Doctrine of Humanitarian Intervention. *Amsterdam Law Forum*, 42-48.

Tickner, A. (enero-junio de 2007). Intervención por invitación. Claves de la política exterior colombiana y de sus debilidades principales. *Colombia Internacional*(65), 90-111.

The Economist. (6 de marzo de 2003). The balloon goes up. *The Economist*.

Unión de Naciones Suramericanas. (2009). *Declaración de Bariloche*. UNASUR. San Carlos de Bariloche: Unasur.